

Bogotá D.C., marzo de 2025.

Señor

JUEZ 4º CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO, NARIÑO.

E. S. D.

Referencia

Radicación No. 52001310300420230029100

Demandantes: Trinidad Yomara Arellano Villareal y Otros.

Demandados: EPS SANITAS S.A.S. y otro.

Asunto: Contestación de demanda.

EDGARDO JOSÉ ESCAMILLA SOTO, identificado como aparece al pie de mi firma y actuando como apoderado de la **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.**, en adelante, **EPS SANITAS S.A.S.**, por medio del presente escrito, de conformidad con lo reglado en el artículo 96 del Código General del Proceso y encontrándome dentro del término previsto para tal fin, procedo a contestar la demanda de la referencia.

IDENTIFICACIÓN DE EPS SANITAS:

EPS SANITAS S.A.S., fue constituida mediante Escritura Pública No. 3796 del 1º de diciembre de 1994, otorgada en la Notaría 30 del Círculo de Bogotá D. C., inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el 16 de diciembre de 1994, bajo el No. 474089 del Libro IX, con matrícula mercantil No. 00626289 y número de identificación tributaria 800.251.440-6, debidamente autorizada para operar como tal por la Superintendencia Nacional de Salud, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la citada Cámara y en Resolución No. 0981 de diciembre de 1994.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS (PRETENSIONES)

Frente a las “DECLARATIVAS”:

Frente a la denominada “1”. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frente a la denominada “2”. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una

relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **“3”**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **“4”**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **“5”**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frente a las **“CONDENAS”**:

Frete a la denominada **“1 PERJUICIOS MORALES”**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **"2 DAÑO A LA SALUD"**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **"3 DAÑOS A BIENES Y DERECHOS PERSONALÍSIMOS"**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **"4 DAÑOS MATERIALES"**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **"5"**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada **"6"**. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada “7”. Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada “8” Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

Frete a la denominada “9” Mi representada se opone a esta pretensión, por cuanto, analizado el caso no se advierte que se estructuren los elementos que conducen a que se declare la existencia de responsabilidad civil, esto es: (i) un hecho que sea contrario a derecho; (ii) un daño; (iii) una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y; (iv) un factor de imputación, presupuestos que deben ser probados de manera individual por la parte actora para que proceda la declaración aquí pretendida. Así, al no configurarse en el presente caso los elementos que integran la responsabilidad demandada, no puede ser declarada responsable y reconocer los perjuicios aquí reclamados.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS.

- | | |
|-------------------|---|
| AL HECHO 1 | No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho. |
| AL HECHO 2 | No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho. |
| AL HECHO 3 | No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho. |
| AL HECHO 4 | Es cierto, en cuanto a a que la Señora Trinidad Yomara Arellano Villareal está a filiada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de EPS SANITAS S.A.S. |
| AL HECHO 5 | Es cierto, bajo la cobertura de servicios de EPS Sanitas nos permiten validar paciente con primera consulta a control prenatal el día 23/01/2019 |
| AL HECHO 6 | No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio. |

- AL HECHO 7** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 8** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 9** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 10** No es un hecho. Es una afirmación de la parte que deberá ser probada en el proceso.
- AL HECHO 11** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 12** No es un hecho. Es una afirmación de la parte, en punto de que los médicos tratantes estaban reaccionado de manera tardía al estado del menor, situación que deberá ser probada en el proceso.
- AL HECHO 13** No es un hecho. Es una afirmación de la parte, en punto de que los médicos tratantes no efectuaron o ejecutaron acciones que el menor requirió de acuerdo a su cuadro clínico, situación que deberá ser probada en el proceso.
- AL HECHO 14** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio. Sin embargo, se debe destacar que i) del material probatorio allegado con la demanda se extrae *"27/07/2019 hora: 21:35 en calidad de remisión para valoración por cirugía pediátrica a Hospital infantil los Ángeles, con diagnósticos: Perforación del intestino NO TRAUMATICA, otros recién nacidos pretermino, Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, neumotórax espontaneo a presión."* ii) la remisión se da dentro de tiempo establecidos sin incurrir en demoras, solicitada el 27/07/2019 y respondida y materializada el mismo día. Los días anteriores, posterior a su nacimiento, el recién nacido recibió atención oportuna y pertinente teniendo en cuenta su condición de prematuridad y diferentes complicaciones presentadas.
- AL HECHO 15** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 16** No le consta a mi representada, no tiene injerencia directa en el hecho en tanto no prestó directamente el servicio.
- AL HECHO 17** No es un hecho. Es una afirmación de la parte que deberá ser probada en el proceso.
- AL HECHO 18** No es un hecho. Es una afirmación de la parte que deberá ser probada en el proceso.

EXCEPCIONES

Sin que con ello reconozca derecho alguno en favor de los demandantes, propongo las siguientes excepciones de mérito:

- **DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE EPS SANITAS S.A.S. – AUSENCIA DE CULPA.**

EPS Sanitas S.A.S., en su papel de asegurador, no incumplió ninguna de las obligaciones establecidas en la ley. Recuérdese que el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 definió las competencias de las EPS.

Se dispone en dicha norma:

“ARTÍCULO 177. DEFINICIÓN. Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el título III de la presente Ley”.

Definidas las competencias, y dada la narración de los hechos, en este caso no puede atribuírsele a EPS SANITAS S.A.S. responsabilidad alguna por cuanto **no intervino en la prestación directa del servicio**, esta se efectuó directamente a través de una IPS de la cual se desprende, persona jurídica diferente a mi representada, la cual, a su vez se ajustó a los protocolos de atención y dispensó esta desde la autonomía médico científica (Ley 1438 de 2011 artículo 105) que la ley le asigna. De manera que E.P.S SANITAS S.A.S no estará llamada a responder por las actuaciones autónomas que emitió tal entidad.

De otra parte, en lo que hace referencia a la culpa, como elemento subjetivo de la responsabilidad, habrá de entenderse por ella en materia de responsabilidad médica, la imprudencia, impericia, negligencia o descuido, en general la descalificación o juicio de desvalor, que pueda efectuarse en relación con la conducta observada por el médico tratante e I.P.S. en el caso concreto, sin que sean admisibles en orden a su configuración valoraciones en abstracto o generalizantes que de ninguna manera pueden servir para tener por establecida la existencia de este requisito fundamental de la responsabilidad. De cara a EPS SANITAS S.A.S debe señalarse que no existió culpa en su actuar, ni mucho menos dolo, su señoría, pues la labor de mi representada obedeció precisamente a establecer y poner a disposición todos los medios para que el menor accediera a los servicios de salud que necesitó en una IPS que cumple con todos los criterios de habilitación señalados por la ley para tal efecto, lo que de entrada desvirtúa cualquier imputación contra EPS SANITAS S.A.S.

- **INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTABLE A EPS SANITAS S.A.S.**

El daño, elemento fundamental de la responsabilidad civil, es el menoscabo o detrimento que, como consecuencia de un evento o acontecimiento determinado, sufre una persona en sus bienes

o intereses que están vinculados con su patrimonio, su personalidad o su esfera espiritual o afectiva. Ahora bien, para que el daño sea resarcible se requiere que sea personal, cierto, directo e injusto, entendido lo primero como la legitimidad para su reclamación, lo segundo como la posibilidad de verificarlo jurídica y materialmente, lo tercero como la consecuencia del hecho contrario a derecho, y lo cuatro como la ausencia de consentimiento.

Para el presente caso, se advierte que las demandantes piden pretensiones indemnizatorias, sin sustentar desde el punto de vista médico y fáctico, conforme a las prerrogativas que la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto para este tipo de caos, la razón por la cual mi representada incumplió sus obligaciones, pues únicamente se limita a afirmar que el paciente, presuntamente, recibió una mala atención. La mencionada falla, que se invoca en la demanda y que se alega de manera general, no puede considerarse constitutiva de responsabilidad en cabeza de mi representada, pues, como se advirtió no existieron obstáculos o situaciones que impidiera a al menor acceder al servicio.

En este orden de ideas, vale la pena traer a colación la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 30 de agosto de 2013, en la cual indica:

“cuando se presentan acontecimientos en los que a pesar de una actuación diligente, del uso oportuno y adecuado de los recursos técnicos, profesionales y administrativos con los que contaba el profesional de la salud se produce el daño, éste no será materia de resarcimiento, por haber desbordado las posibilidades o intervención al alcance del galeno.

*Al respecto ha dicho la Corte que “(...) no puede desconocerse que no son pocas las circunstancias en que ciertos eventos escapan al control del médico (...) **pues a pesar de la prudencia y diligencia con las que actúe en su ejercicio profesional, no puede prevenir o evitar algunas consecuencias dañosas.** Así acontece, verbi gratia, en aquellas situaciones en las que obran limitaciones o aleas propias de la ciencia médica, o aquellas que se derivan del estado del paciente o que provengan de sus reacciones orgánicas imprevisibles o de patologías iatrogénicas o las causadas por el riesgo anestésico, entre otras, las cuales podrían calificarse en algunas hipótesis como verdaderos casos fortuitos con la entidad suficiente para exonerarlo del deber resarcitorio.*

(...)

*“Incluso, no puede soslayarse que el quehacer médico, pese a estar ajustado a los métodos científicos, **ocasiona un daño en el cuerpo o en la salud del enfermo, el cual no podría atribuirse al profesional de la medicina,** en la medida en que no hubiere concurrido culposamente en su producción o agravamiento. De ahí que la doctrina suela concluir que la llamada ‘iatrogenia inculpable’, noción que también involucra los métodos terapéuticos y los diagnósticos ceñidos a la ciencia médica, no comprometa su responsabilidad” (sentencia de 1° de diciembre de 2011, exp. 1999-00797-01).”*

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el daño antijurídico alegado es una presunta mala atención dispensada al menor JOSUE REINA ARELLANO, sin embargo del material probatorio

allegado con la demanda no hay prueba alguna que dé cuenta o sustente la afirmación hecha por la accionante.

Así las cosas, al no evidenciarse un daño antijurídico que pueda ser atribuible a mi representada, no es posible declararla responsable del mismo y cubrir los perjuicios que este generó.

- **INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL ACTUAR DESPLEGADO POR EPS SANITAS Y EL RESULTADO RECLAMADO COMO DAÑOSO**

Conforme a lo planteado en las excepciones precedentes, es menester concluir que para que se configure la responsabilidad civil, entendida como la obligación de reparar los daños causados a otro, ésta tan solo surge en la medida en que concurren los elementos esenciales: la culpa, el daño y el nexo causal; al punto que, si falta uno sólo de ellos, no surge la obligación de reparar.

El Sistema Jurídico Colombiano, acogió el régimen subjetivo de responsabilidad, en el cual, la simple autoría material del hecho dañino no obliga a indemnizar, sólo se obliga a reparar los daños causados con dolo o culpa, entendiendo ésta última, al decir de los hermanos Mazeaud, como *“un error de conducta en el que no habría incurrido una persona media prudente y diligente situada en las mismas circunstancias externas de tiempo, modo y lugar en que se encontraba el autor del daño”*.

Igualmente, es indispensable que el daño alegado sea efecto o resultado de la conducta del demandado, significa esto que cuando el Juez se pregunte ¿quién fue?, ¿a quién le atribuimos el daño?, el acervo probatorio le permita inferir que el causante fue el demandado.

En el presente caso, no existe el elemento culpa, representado como un incumplimiento contractual y legal, dado que como se reitera, EPS SANITAS S.A.S. actuó bajo los parámetros que, bajo su calidad de asegurador definida por la ley.

De esta manera, respecto a mi representada no se materializan los tres elementos de responsabilidad: El daño, la culpa y el nexo causal y sin ellos, no se puede declarar su ocurrencia respecto de mi prohijada.

Conforme a lo anterior, el Despacho deberá analizar de manera individual la presunta responsabilidad de cada una de las demandadas, esta defensa es contundente en advertir que EPS Sanitas no incurrió en responsabilidad alguna, pues no se puede establecer el nexo causal entre las actuaciones médicas y el resultado reclamado como dañoso, dado que este presuntamente se dio como consecuencia de la evolución y complejidad de la patología.

- **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD.**

Retomando lo dicho la primera excepción, los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud tienen unas obligaciones propias según su naturaleza jurídica; así las cosas, en el caso de las EPS su principal función es la de administrar el riesgo en salud de su población afiliada. En la medida que, desarrollan su objeto social también contraen derechos y obligaciones inherentes a las funciones desarrolladas.

Ahora bien, en la medida que resulten probados los hechos de la demanda impetrada por los demandantes, no existe solidaridad frente a la responsabilidad y la indemnización del supuesto daño por parte del causante del mismo, CLÍNICA LAS PEÑITAS, y EPS SANITAS S.A.S., por las siguientes razones:

Sea lo primero aclarar que la solidaridad tiene su origen en la ley, el testamento y en el contrato. En el presente caso la parte actora demanda por responsabilidad a EPS SANITAS S.A.S., por la atención prestada la CLÍNICA LAS PEÑITAS, situación que no es acertada y por el contrario se torna equivocada por las razones que a continuación se detallan:

La primera parte del artículo 1.568 del Código Civil detalla cuando **no hay solidaridad**, al establecer:

“(...) En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. (...)”

Como se observa la regla general es la no solidaridad de las obligaciones contractuales y la excepción la trae el mismo artículo 1.568 del Código Civil, cuando establece:

“(...) Pero en virtud de la convención, el testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda y entonces la obligación es solidaria (...)”

Es decir que la causa de la solidaridad es la Convención, el Testamento, o la Ley.

En el caso de EPS SANITAS S.A.S., y CLÍNICA LAS PEÑITAS , no existe convención, ni testamento que determine la solidaridad de estos frente a los daños por los cuales se demanda; ahora bien, tampoco la Ley ha establecido que EPS SANITAS S.A.S., y CLÍNICA LAS PEÑITAS, deban responder solidariamente por tales daños o por el contrario que la E.P.S. SANITAS, deba responder por los daños que hubiere podido generarse dada la atención médica que recibió DAVID JULIAN, en las instalaciones de CLÍNICA LAS PEÑITAS.

La solidaridad no se presume, debe probarse y por el contrario es una excepción a la regla general del efecto de las obligaciones.

En lo que se refiere a la Pluralidad de deudores: en este caso hay dos deudores, pero sobre causas y deudas diferentes. El primero es la EPS SANITAS que se obliga para con el afiliado a administrar su riesgo en salud directa o indirectamente como consecuencia del contrato de afiliación al Plan de Beneficios en Salud (PBS), como también al reconocimiento económico en caso de incapacidades derivadas de enfermedad general y licencias de maternidad; el segundo deudor sería CLÍNICA LAS PEÑITAS, que por disposición de la Ley 100 de 1993 al haber sido contratada por la EPS para suministrar servicios de salud a sus usuarios asume la obligación de suministrarlos bajo los principios **básicos la calidad y la eficiencia, IPS que en este caso es un deudor por disposición de la Ley.**

En cuanto a la Unidad de Prestación: en este caso, cuando la E.P.S., contrata con la I.P.S., el suministro de servicios de salud, y ésta a su vez designa a los profesionales de salud que suministrarán el servicio, siendo la I.P.S., y el médico los responsables en la prestación de los mismos y no de la E.P.S., quien para este caso específico asume el compromiso de pagar el cubrimiento económico a la I.P.S., el valor de los mismos, no existiendo unidad de la prestación pues unas obligaciones quedan en cabeza de la E.P.S., y otras obligaciones en cabeza de la I.P.S.

En lo que se refiere a que la obligación sea divisible; en el presente caso la obligación es divisible pues el objeto de la misma comprende varias cosas.

Debe tenerse presente lo que establece el artículo 1.569 del Código Civil.

“(...) Artículo 1569.- La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros. (...)” (El subrayado fuera del texto).

En el caso de la prestación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), la cosa debida no es una sola, el objeto de la obligación es variado, servicios de salud y reconocimientos económicos por enfermedad general o licencia de maternidad, lo que hace que no sea una sola cosa el objeto de la obligación para con los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), al ser la misma Ley (Ley 100 de 1993) la que autorizó a la E.P.S., a la contratación de I.P.S., para la prestación de servicios de salud de su población afiliada, trae como consecuencia que la cosa debida (servicios del plan obligatorio de salud) inicialmente se encuentre en cabeza de dos deudores diferentes por disposición de la Ley, uno que es el encargado de prestar los servicios de salud (I.P.S.) y otro que administra los dineros de la seguridad social en salud de tal forma que el usuario afiliado pueda acceder a las prestaciones asistenciales y económicas.

Como se puede ver, la solidaridad no existe al no ser una sola cosa la que se debe y al estar la cosa debida en cabeza de varios deudores. En el caso del contenido del Plan de Beneficios en Salud (objeto de la obligación), éste es divisible y por lo tanto cada deudor debe responder solamente por su parte o cuota en la deuda; es decir las E.P.S. y las I.P.S., responden por las obligaciones que cada uno les son inherentes a sus funciones como actores del SGSSS, en este caso particular también debe responder el médico que realiza el acto médico cuando quiera que este es contrario a la “Lex Artis”.

Partiendo de lo anterior, es claro que la responsabilidad de EPS SANITAS, con los afiliados es la de garantizar el acceso a la prestación del PBS Contributivo a partir de los factores expuestos y cuando la EPS, garantiza indirectamente el acceso al servicio, sería totalmente imposible auditar y garantizar el resultado y desenvolvimiento del acto médico en el mismo momento en que se está realizando, disponiendo de un funcionario de la EPS, dentro de todas las atenciones médicas del país y en todos los consultorios para verificar si los procedimientos quirúrgicos o el acto médico en sí, se están haciendo acordes a la técnica médica (Lex Artis) en el mismo momento de la prestación.

Ahora bien, la solidaridad se presume en el caso de delitos o culpas conforme a lo establecido por el artículo 2.344 del Código Civil, pero en el presente caso no estamos en presencia de un delito o culpa realizado por dos personas que es el presupuesto de la solidaridad, además los hechos

imputados no fueron realizados como consecuencia de un acuerdo de voluntades entre EPS SANITAS S.A.S., y el prestador del servicio acá codemandado.

- INDEBIDA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS PRETENDIDOS

Perjuicios Morales:

El daño moral es *“el precio del dolor y ocasiona el sufrimiento de la víctima o perjudicado”*¹ y *“la fijación del quantum de la respectiva indemnización depende de la intensidad del dolor sufrido por la víctima”*², sin embargo, la jurisprudencia ha destacado que no existen pruebas objetivas que puedan medir la existencia de esta clase de perjuicios, e incluso en algunos casos, como el fallecimiento de una persona³, las lesiones personales⁴ o la afectación al buen nombre⁵, ha establecido una presunción de hecho.

Al respecto, debe indicarse que los demandantes se limitaron a fijar el *quantum* de los perjuicios morales, sin consignar explicación alguna y sin ni siquiera reparar en los montos que ha reconocido la jurisprudencia Civil para aquéllos casos en los cuales se impone la reparación, a saber:

1	Mayo 5 de 1999: Señala en diez millones de pesos (\$10.000.000) la cantidad máxima que se ofrecía como justa para paliar en alguna forma el dolor sufrido.
2	Septiembre 7 de 2001: CSJ condenó al pago de quince millones de pesos (\$15.000.000) por perjuicios morales. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Septiembre 7 de 2001. Expediente 6171. Magistrado ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno.
3	Junio 30 de 2005: Reconoce a una hija una indemnización por concepto de perjuicio moral sufrido con ocasión de la muerte de la madre, de \$20'.000.000. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Junio 30 de 2005. Expediente: 68001-3103-005-1998-00650.01. Magistrado ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar.
4	Enero 20 de 2009: Se reconoce indemnización por perjuicio moral de \$40'.000.000. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Enero 20 de 2009. Expediente: 170013103005-1993-00215-01. Magistrado ponente: Pedro Octavio Munar Cadena.
5	Noviembre 17 de 2011: Se reconoce indemnización por perjuicio moral de \$53'.000.000. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Noviembre 17 de 2011. Expediente: 11001-3103-018-1999-00533-01. Magistrado ponente: William Namén Vargas.
6	Agosto 8 de 2013: Se reconoce indemnización por perjuicio moral de \$55.000.000 a una hija por la muerte de su padre. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Agosto 08 de 2013. Expediente: 11001-3103-003-2001-01402-01. Magistrado ponente: Ruth Marina Díaz Rueda.

¹ Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Tomo I. Ed. Dike. 2007. Pág. 393.

² STC21828-2017

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 5 de agosto de 2014. Radicación: Exp. No. 2003-00660-01. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.

⁴ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 6 de mayo de 2016, radicación: 54001-31-03-004-2004-00032-1 Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.

⁵ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 5 de agosto de 2014, radicación: 11001310300320030066001, Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.

7	Agosto 24 de 2017: <u>Se reconoce indemnización por perjuicio moral de sesenta millones de pesos (\$ 60.000.000).</u> Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC13925-2016, radicación 2005-00174-01.
---	--

En efecto y sin que el planteamiento de la presente excepción implique un reconocimiento del supuesto daño causado, respetuosamente se considera que, las demandantes señalaron sin fundamento alguno la suma de 100 salarios mínimos cada una, omitiendo probar su afectación desde el punto moral, por cuanto ésta no puede sólo presumirse, sino que debe probarse, pues de la simple relación filial, consanguínea o de afinidad con el paciente no predica *per se* un daño moral. Cosa que evidentemente en el caso sub examine no se prueba puesto que no existe prueba siquiera sumaria que demuestre la supuesta ofensa que se les causó a las hoy demandantes los procedimientos médicos practicados a JOSUE.

Además, debe indicarse que no se encuentra relación de causalidad entre las afectaciones sufridas por JOSUE y la actuación desplegada por EPS Sanitas. Por lo anterior esta pretensión, señor Juez se debe denegar.

De esta manera, es concluyente que las peticiones de las demandantes, desbordan toda lógica y proporción respecto de los hechos de los cuales pretende indemnización. En consecuencia, se rechaza, por parte de esta defensa, los supuestos perjuicios morales causados a los demandantes, dado que no existen las condiciones para realizar un juicio de imputación ante la falta de presupuestos de responsabilidad.

- **EXCEPCIÓN GENÉRICA:**

Además de las excepciones propuestas en el presente escrito, propongo la denominada excepción genérica, en virtud de la cual deberán declararse probadas las excepciones que, no habiendo sido expresamente enunciadas, resulten probadas en el proceso y se funden en las disposiciones constitucionales, legales, contractuales y las directrices jurisprudenciales que constituyan el marco jurídico con fundamento en el cual habrá de decidirse el presente litigio.

PETICIÓN ESPECIAL – OBJECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Como quiera que en las pretensiones condenatorias la parte demandante incurre en unas pretensiones notoriamente injustas y fuera de todo contexto, desde el punto de vista jurisprudencial y conforme lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso, el suscrito apoderado a través de la presente contestación procede a **OBJETAR** las sumas indicadas por el apoderado de la parte demandante dentro del escrito de la demanda, en el entendido en que no cumple con los requisitos establecidos jurisprudencialmente.

Así las cosas, se tiene que el artículo 206 del Código General del Proceso dispone que:

(...)

“Artículo 206. Juramento estimatorio.

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Modificado por el art. 13, Ley 1743 de 2014. Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. Modificado por el art. 13, Ley 1743 de 2014.

También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. (...)Subrayado y negrita texto afuera.

Esta objeción se realiza sobre los perjuicios inmateriales, que si bien sobre estos últimos el demandante no se encuentra obligado a realizar juramento estimatorio, el artículo 82 del Código General del Proceso si se lo exige, no lo exonera, veamos:

“Artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.
- 7. El juramento estimatorio,** cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley” Subrayado y negrita texto afuera.

En ese entendido y como quiera que en las pretensiones del líbello de la demanda, la parte actora incurre en unas pretensiones notoriamente injustas y fuera de todo contexto factico, legal y jurisprudencial, no es factible que se realice condena alguna en virtud de las pretensiones expresadas en la demanda, toda vez que son notoriamente injustas, pues no se compadecen con los antecedentes jurisprudenciales fijados por las Altas Cortes y no aporta prueba idónea razón por la cual, se procederá a realizar la correcta y eventual liquidación correspondiente a fin de ilustrar al Despacho en este sentido, para que evidencie que en efecto, existe una injusta estimación “razonada” de la cuantía por parte de la apoderada de la parte demandante y por ende, deberá condenarse a pagar la suma que corresponda, tal y como se indica a continuación en donde se realiza la liquidación de rigor, así:

Respecto de los daños inmateriales:

Al respecto, la sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de noviembre de 1992, indicó que si bien la reparación pecuniaria del daño moral “*proporciona al perjudicado o lesionado una satisfacción por la aflicción u ofensa que se le causó (...) es importante no perder de vista que el hecho de aceptar como postulado general observancia el reconocimiento de la resarcibilidad de los daños no patrimoniales, **de suyo no quiere significar que esa clase de reparación sea ilimitada.***”

De lo anterior se corrobora que el daño moral no puede sólo presumirse, el daño moral debe probarse y no puede dejarle a la imaginación y al cálculo generoso. Cosa que evidentemente en el caso sub examine no se prueba puesto que no existe prueba siquiera sumaria que demuestre la

supuesta la aflicción u ofensa que se les causó a lo hoy demandantes, por lo anterior esta pretensión, señor Juez se debe denegar.

Ahora, respecto de la cuantificación del daño moral comprendido en las sumas solicitadas para los demandantes que se suscriben como padres, hermanos y sobrinos, se tiene que a todas luces se encuentra injusto y por fuera de toda proporcionalidad sentada por la jurisprudencia de las altas cortes en sede civil. Aunado que ni siquiera allega el análisis realizado para determinar dicha cuantía, ni se demuestran condiciones de filiación, convivencia, ni de perjuicios.

De esta manera, también, es concluyente que las peticiones del demandante, desbordan toda lógica y proporción respecto de los hechos de los cuales pretende indemnización.

En consecuencia se rechaza vehementemente, por parte de esta defensa, los supuestos perjuicios morales causados en la persona de los demandantes, dado que no existen las condiciones para realizar un juicio de imputación ante la falta de presupuestos de responsabilidad, como se demostrará más adelante.

Luego entonces se encuentra entonces que los supuestos perjuicios alegados no cumplen con los requisitos mínimos para considerarse como tal, dado que obedecen a meras expectativas, caprichos y estimaciones sin sustento. Según la teoría general de las obligaciones⁶ el daño debe ser directo, cierto y actual, tres condiciones que no cumplen los supuestos perjuicios en comento, dado que es incierto indicar que causaron “daños materiales y/o inmateriales” cuando no hay prueba que lo acredite o indique.

Teniendo en cuenta entonces que la suma total de las pretensiones que hizo el apoderado de la parte actora, y que ello, es NOTORIAMENTE INJUSTO y excesivo, con base en los ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES ACTUALMENTE VIGENTES, se solicita entonces al Despacho se sirva ordenar de oficio su regulación con base en lo ya expuesto y, atendiendo a que a todas luces la suma pretendida excede más de tres veces, se deberá condenar a la parte demandante a pagar el 10% de la diferencia que resulte entre el monto regulado por el Despacho y el liquidado con base en la jurisprudencia de las altas Cortes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito separado, con observancia de los preceptos establecidos en el Código General del Proceso, se presentó llamamiento en garantía a **EQUIDAD SEGUROS**, en virtud de la póliza de responsabilidad civil profesional clínicas y hospitales de la cual es asegurada EPS Sanitas S.A.S.

⁶ Tamayo, Lombana Alberto. Manual de Obligaciones. La responsabilidad civil – Fuente de obligaciones. Ed. Temis S.A. Bogotá. Colombia. 1998.

PRUEBAS

Solicito a su señoría se practiquen y se tengan como pruebas las siguientes:

- **PRUEBAS DOCUMENTALES:**

- Registro ADRES – Compensado –
- Registro ADRES – Certificación de Afiliación.
- Afiliación, Autorización y Utilización de servicios (Archivo Excel).

- **INTERROGATORIO DE PARTE:**

Solicito al Despacho se sirva hacer comparecer a las demandantes y al codemandado para que absuelvan el interrogatorio de parte que les formularé frente a los hechos que se narran en la demanda y en sus contestaciones. Los convocados podrán citarse en la dirección referida en la demanda y en la respectiva contestación. El pliego de preguntas lo acompañaré en sobre cerrado o abierto una vez se encuentre decretada la presente prueba y de manera previa a la fecha fijada para su realización, reservándome, en todo caso, el derecho a formularlo de manera oral el día estipulado para la audiencia de rigor o a retirarlo.

Ahora, frente al Codemandado, Solicito se requiera al Representante Administrativo de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO para que presente y rinda informe sobre los hechos debatidos en esta demanda, que a dicha Entidad le conciernen, concretamente CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO OCTAVO. El señor Representante Legal podrá ser citado o contactado a través del correo electrónico gerencia@hospitalsanpedro.org

- **SOLICITUD PROBATORIA.**

En virtud de lo dispuesto en el Art 15 de la Constitución – Derecho a la Intimidad -, la Resolución 1995 de 1999 – custodia de la Historia Clínica -, Ley 1581 de 2012 – protección del dato personal -, EPS SANITAS S.A.S., al ser asegurador, no tiene acceso al historial clínico de sus afiliados para exponerlo o allegarlo a procesos como el que nos atañe. Sólo lo podría hacer si, de manera directa, hubiese prestado el servicio de salud. Para el caso de JOSUE REINA ARELLANO, el prestador referenciado en los hechos, aparte de EPS SANITAS S.A.S., es la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, personas jurídicas diferentes a mi representada. En esa medida, solicito de manera respetuosa a su señoría que requiera a la IPS mencionada el envío, con destino al proceso que nos convoca, **de la totalidad de la historia del paciente.**

Es de resaltar que si bien el legislador ha dispuesto instrumentos como el derecho fundamental de petición éste, en un ejercicio de ponderación de derechos, cede ante el derecho fundamental a la intimidad. Es por ello que no es posible por un tercero, en este caso mi representada, acceder al historial clínico del paciente. Sin embargo, las autoridades judiciales pueden, en virtud de su

función de administrar justicia, solicitar y acceder al historial clínico con la única intención o fin de que repose como prueba en el proceso.

Con lo anterior se pretende que las partes y del despacho tengan una visión más clara del estado de salud del paciente.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LA PARTE DEMANDANTE.

- **DOCUMENTOS.** Me opongo a que se tengan como prueba historia clínica alguna, allegada por la parte demandante, referidas a las atenciones recibidas por JOSUE REINA ARELLANO en tanto no se observe constancia del prestador de servicios de salud donde acredite, por ejemplo, el número de folios de que la componen, el lapso que comprende las atenciones que reposan en ella.
- **INTERROGATORIO DE PARTE.** No me opongo. Es una carga que la ley procesal civil asigna.
- **TESTIMONIALES:** No me opongo. Me reservo la facultad del contrainterrogar.
- **PERICIAL:** Solicito no decrete el mismo, esto en cuento a que la parte demandante, si se tiene en cuenta la fecha de conciliación ha contado con suficiente tiempo para allegarlo al proceso. Recuérdese que el solicitar su decreto al Juez sólo opera cuando la parte no ha tenido el tiempo suficiente para allegarlo. Ahora bien, si el despacho lo decreta, se solicita i) se permita a EPS SANITA S.A.S. allegar un dictamen pericial para controvertir lo dicho en el que arrime la parte y ii) se le permita a EPS SANITAS S.A.S. a través de su apoderado interrogar al perito.

ANEXOS

- Se anexan los documentos relacionados en el acápite probatorio.
- Copia del certificado de existencia y representación de EPS Sanitas S.A.S.
- Poder

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES DE LA PARTE DEMANDADA

EPS Sanitas S.A.S. recibe notificaciones en la Calle 100 No 11b- 67 piso 3 – Central Jurídica de la ciudad de Bogotá D.C. y a los correos electrónicos: ejescamilla@epssanitas.com y notificajudiciales@keralty.com

Cordialmente,



EDGARDO JOSÉ ESCAMILLA SOTO

C.C. N°. 15.726.180

T.P. N° 157.807 del C. S. de la J.